

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**

DEMANDANTE	: MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA
DEMANDADO :	: COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2017-0761-02
RADICADO INTERNO	: 272-22
DECISIÓN	: MODIFICAR AGENCIAS Y CONFIRMAR
ACTA NÚMERO	: 345

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

**ANTECEDENTES**

Mediante auto del siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2022) el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, liquidó las costas y agencias en derecho en el siguiente tenor (expediente digital 02):

- A cargo de la demandante y a favor de Colfondos S.A, en la suma de \$881.242.
- A cargo de la demandante y a favor de Colpensiones, en la suma de \$5.481.242.
- A cargo de la demandante y a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y crédito Público, en la suma de \$5.481.242

Frente a lo anterior, **la Sra. MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA interpuso recurso de reposición**, contra la providencia que liquida las costas y agencias en derecho, manifestando que no se encuentra en la capacidad económica para solventarla; que presentó la presente demanda porque es una adulta mayor, cuenta con 65 años de edad y su mesada pensional asciende al salario mínimo legal el cual le sirve como sustento y apoya su solicitud en el art. 152

del CGP. Finalmente manifestó que solicita se reponga la decisión y le sea concedido el amparo de pobreza conforme lo establece el art. 152 del CGP, por encontrarse en las condiciones previstas en el art. 151 ibidem, afirmación que la hace bajo la gravedad del juramento, y solicita se de aplicación al art. 154 de la normatividad enunciada y se exonere del pago de costas judiciales (expediente digital 03).

Por su parte, **el apoderado de la demandante** allega al correo electrónico institucional, dos memoriales en los que interpone el recurso de reposición y en subsidio de apelación, **solicitando en el primero de ellos que reposa en el expediente digital 04**, que se reponga el auto del 7 de septiembre de 2022, incluyendo en la liquidación y aprobación de costas procesales el porcentaje ordenado en la sentencia SL 2760 de 2022, proferida por la Corte Suprema de Justicia; se reponga la decisión y en su lugar se modifiquen las agencias en derecho y costas liquidadas por el Juzgado, y se fijen como costas y agencias en derecho el monto mínimo posible y en caso de no acceder a lo peticionado sea remitido para que el superior resuelva en subsidio, el recurso de apelación.

Las anteriores solicitudes las sustenta en que el Juzgado al momento de liquidar y aprobar las costas procesales y agencias en derecho, lo hizo por un valor superior al indicado en sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que dicha providencia dispuso *“Las costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente demandante y a favor de Colpensiones y La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un 50% a cada una de ellas. Se fijan como agencias en derecho la suma única de \$4.700.000.”* por lo que considera que la liquidación de costas fue realizada en forma errada dado que la providencia en mención indicó que la condena en costas corresponde a una suma única de \$4.700.00 que se pagarían en un 50% a favor de cada una de las opositoras y se distribuiría en partes iguales y no en un 100%, como fue erradamente entendido por el Juzgado.

Así mismo señala que la inconformidad con el valor de la condena en costas procesales, tanto en primera instancia como en la Corte Suprema de Justicia, es porque para la fecha de presentación de la demanda que lo fue el 13 de septiembre de 2017, ni cuando se presentó el recurso extraordinario de casación, existía claridad ni doctrina probable establecida por la Corte Suprema de Justicia frente a la consecuencia jurídica aplicable a los casos en que un asesor del fondo de pensiones hubiese omitido el deber de información y el afectado tuviese la calidad de pensionado, pues ello solo se estableció a

partir de las sentencias SL 373 de 2021, 3545 y 5704 de 2021, en ese sentido, no le asiste razón al A Quo imponer una condena en costas, y más porque la demandante no cuenta con los recursos suficientes para solventar dicha condena. Por lo tanto solicita, se considere la decisión de la condena en costas de primera instancia y lo ordenado por el superior en sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, como quiera que la demandante al momento de presentación de la demanda tenía una expectativa diferente a las resultados del proceso pues lo que pretendía era obtener un beneficio en su mesada pensional dada que la que percibe es irrisoria y las costas impuestas son un gasto que no puede asumir dado su situación económica.

Por su parte, en el **segundo correo electrónico que reposa en el expediente digital 05**, el apoderado de la parte le solicita al juzgado de conocimiento, que reponga el auto proferido el 7 de septiembre de 2022 y en su lugar exonerar a la demandante de las costas y las agencias en derecho liquidadas y aprobadas y que fueron ordenadas en primera instancia y por la Corte Suprema de Justicia; así mismo, se reponga la decisión adoptada y se haga la distribución de las costas procesales y agencias en el porcentaje indicado, es decir el 50%, de conformidad con lo ordenado en sentencia SL 2760 de 2022, proferida por la Corte Suprema de justicia, y en caso de no acceder a lo petitionado se remita al superior para que resuelva en subsidio el recurso de apelación.

Solicitudes que eleva, con el mismo sustento del memorial anterior, adicionando a ello, que si bien el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 es la fuente que establece las tarifas de agencias en derecho, su aplicación no es de manera automática, pues debe existir una integración en su interpretación y aplicación, con los arts. 365 y 366 del CGP lo cual no ocurrió por parte del despacho, ni por la Corte Suprema de Justicia, dado que la demandante es una persona de 65 años de edad, pensionada con una mesada pensional mínima, cuenta con una capacidad económicamente leve, encontrándose en imposibilidad absoluta de cubrir unas costas procesales excesiva, pese que las demandadas no son personas naturales.

Debido a lo anterior, sostiene el recurrente, que la cuantía de la condena en agencias en derecho en materia laboral, debe ser fijada atendiendo la posición de los sujetos procesales, la cual varía dependiendo de quien es la parte vencida, y en este evento se trata de la parte demandante que es la más vulnerable; así mismo, como la complejidad e intensidad de la participación procesal, teniendo en cuenta además que ante la demora de darle trámite al

proceso judicial, se presentaron estas circunstancias máxime cuando para la fecha en que se inició el proceso judicial la jurisprudencia era más laxa frente a este tipo de tramites.

Sumado a lo anterior, frente a la fijación de las agencias en derecho, indica quién es el llamado a fijarlas, y a pesar que ese actuar es discrecional, está limitado por las tarifas máximas y mínimas y criterios que fija el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 en el art. 5º y 9º; para definir el valor de las agencias en derecho establece que se debe tener en cuenta el tipo de proceso para identificar el máximo a imponer, y los criterios en particular de la actuación de la parte favorecida con la condena en costas, con base a ello solicita se considere la decisión de la condena en costas de primera instancia y lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, como quiera que la demandante al momento de presentación de la demanda tenía una expectativa diferente a las resultas del proceso, máxime cuando lo que buscaba era obtener un beneficio en su mesada pensional como quiera que la recibida es irrisoria y pues la condena en costas resulta ser un gasto que mi mandante no puede asumir dado su situación económica.

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín en auto emitido el dieciséis (16) de septiembre de 2022 no repuso la decisión adoptada en el auto del 7 de septiembre de la presente anualidad y negó el amparo de pobreza solicitado, expresando frente a la liquidación de costas, que al efectuar la liquidación de agencias en derecho, se ciñó a lo regulado en el literal a) del art. 5º del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, por una norma de obligatorio cumplimiento para los despachos judiciales, tal como se infiere del ámbito de aplicación previsto en su art. 1º y del numeral 3º del art. 43 de la Ley 794 de 2003, aplicable por analogía (artículo 145 C. P. L. y S.S.), al procedimiento laboral, las que se tuvieron en cuenta en la liquidación de costas efectuada. Así mismo, porque conforme lo los principios de autonomía e imparcialidad de la justicia consagrados en el art. 228 de la Constitución Nacional, es del fuero del fallador decidir de conformidad con su criterio jurídico, pero siempre dentro del marco legislativo, como ocurrió en este caso, ya que en ninguna parte de la legislación, jurisprudencia y doctrina, se obliga a que se deba imponer el máximo o el mínimo de las agencias en derecho y la ley obliga al Juzgador a moverse dentro de unos parámetros específicos, como ocurrió. Considera que las agencias en derecho tasadas se ajustan a los criterios de equidad y razonabilidad, sin que haya motivo para ser modificadas.

Y en relación a la negación del **amparo de pobreza solicitado por la Sra. Martha Nuby Tobón Herrera a motu proprio**, el Juzgado manifestó que se adhiere a la posición de la Corte Suprema de Justicia, plasmada en el expediente 27.917 de diciembre de 2005, donde indicó que el amparo de pobreza, por su especial naturaleza y regulación legal, no se concede de manera automática y por ende la procedencia no fluye de la simple solicitud formulada bajo juramento por el peticionario, y retomó de la providencia AL 2871 de 2020 las aclaraciones del voto de los magistrados Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Mauricio Lenis Gómez. Del primer salvamento de voto se extrae, la necesidad que el solicitante del amparo, aporte elementos de juicio que permitan concluir la situación real que enuncia el peticionario y ante tal solicitud, considera que se debe allegar prueba sumaria que demuestre la imposibilidad de asumir los gastos del proceso. Y del segundo salvamento de voto, además de presentar la solicitud bajo la gravedad de juramento se debe “acreditar la situación socioeconómica de la que se deriva el requerimiento del amparo”.

Por tanto, consideró el Juzgado de conocimiento, que al no acreditar la demandante sumariamente su estado económico, ni que se encuentra en incapacidad de sufragar los gastos del proceso, se negaría la solicitud.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**El apoderado de la parte demandante** presenta sus alegatos de conclusión, con los mismos argumentos presentados en el recurso de reposición y en subsidio de apelación.

### **CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Se centra el problema jurídico en determinar: i) Si hay lugar a reconocer el amparo de pobreza solicitado directamente por la Sra. MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA; ii) Si hay lugar a exonerar a la demandante del pago de las costas y agencias en derecho liquidadas y aprobadas; iii) Si hay lugar a modificar las costas procesales y agencias en derecho liquidadas y aprobadas, por haberse realizado por un valor superior al indicado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 2760 de 2022.

Los anteriores aspectos se analizarán en el siguiente orden:

## 1. Del amparo de pobreza

Sea lo primero señalar, que del memorial que reposa en el expediente digital 03, observa la Sala que la Sra. MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA personalmente, interpuso **recurso de reposición** contra el auto por medio del cual liquidó y aprobó las costas y agencias en derecho, argumentando que no se encontraba en la capacidad económica para solventarlas y con base a ello solicitó se concediera el amparo de pobreza; dicha solicitud fue resuelta en auto del 16 de septiembre de 2022, negando la figura procesal solicitada por la parte demandante.

En ese sentido, considera la Sala que al haber sido resuelto por parte del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el **recurso de reposición** elevado por la parte demandante, sin que se haya interpuesto por ella, **en subsidio el recurso de apelación**, se hace improcedente analizar la negación del amparo de pobreza en esta instancia.

Sin embargo, en gracia de discusión al considerarse que se debe hacer un pronunciamiento del amparo de pobreza, al ser resolverse de fondo la pregunta ¿La Sra. MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA le asiste el derecho al reconocimiento del amparo de pobreza? La respuesta sería negativa, pues pese a haber sido presentada la solicitud informando bajo la gravedad del juramento la precaria situación económica, no existe prueba que sustente dicha afirmación y que de certeza a la Sala que efectivamente, la demandante cuenta exclusivamente con ingresos del salario mínimo legal que no le permitan asumir las costas y gastos del proceso impuestas en esta instancia. Lo anterior, encuentra sustento en la sentencia T 339 de 2018, en la que se determina la necesidad de que la parte solicitante del amparo de pobreza, motive su situación económica. Al respecto se señaló:

*“(…) Así lo ha señalado esta Corporación al precisar que el amparo de pobreza tiene una naturaleza personal, es decir, que su reconocimiento no puede tramitarse de manera oficiosa por el funcionario judicial, sino que su procedencia, en específico, dependerá de la solicitud que haga la persona que no cuenta con la capacidad económica para sufragar los gastos del proceso, **constituyéndose en una carga procesal para la parte o el interviniente que pretenda beneficiarse de esta institución.***

*En segundo término, **este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino únicamente a aquellas que reúnan objetivamente las condiciones para su reconocimiento, a saber, que soliciten de forma personal y***

***motivada el amparo, y acrediten la situación socioeconómica que lo hace procedente. (Resalto de la Sala)***

Además de lo anterior, véase como la parte demandante únicamente pretende el reconocimiento del amparo de pobreza una vez fue liquidada y aprobada la liquidación y agencias en derecho, sin que haya elevado dicha solicitud a efectos de ser representado por un apoderado de oficio desde inicios del proceso, guardó silencio en la sentencia de primera y segunda instancia frente a la presunta precaria situación económica que la aquejaba.

En relación a este pronunciamiento, la Sala se remite a lo señalado por el Magistrado Gerardo Botero Zuluaga, en la aclaración del voto presentada en la sentencia SL 4607 de 2021, donde se opone a la absolución de las costas procesales al demandante por haberse reconocido el amparo de pobreza, pero contrario sensu, no le fue designado apoderado que lo representara. Al respecto indicó:

***“... no comparto el hecho de que se hubiese decidido no condenar a la parte actora en costas, por habersele concedido el amparo de pobreza, mediante auto CSJ AL 103-2021.***

*En efecto, tal y como lo hice frente a dicha providencia, si bien comparto el criterio acogido por la Corporación, relativo a que «en aras de propender por la materialización de las garantías de igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia, la petición de amparo de pobreza que en sede extraordinaria de casación sea elevada debe ser examinada sin que implique su rechazo in limine», considero que la finalidad, el objetivo, así como la protección del bien constitucional que se busca con el otorgamiento del amparo de pobreza, **no se configuran en el presente asunto**, puesto quien solicita ser beneficiario de la referida figura jurídica ha contado con los recursos necesarios para acceder a la administración de justicia y soportar las cargas pecuniarias que ello supone a lo largo de todo el proceso judicial sin que, tal situación represente un menoscabo para su sostenimiento y el de quienes dependen económicamente de él, excepto cuando se ve enfrentado a la resolución del recurso extraordinario de casación, en virtud del cual puede tener que llegar a sufragar cauciones, expensas, honorarios de auxiliares de justicia y las costas, en caso de que la decisión le resulta desfavorable.*

*Así las cosas, en mi prudente juicio, el amparo de pobreza solo debe concederse cuando, se está ante «situaciones extremas», lo que supone que el usuario del aparato judicial se «vea forzado a escoger entre atender su congrua subsistencia y la de a quienes por ley debe alimentos, o sufragar los gastos y erogaciones que se deriven del proceso en el que tiene legítimo interés», pues de lo contrario se configuraría un menoscabo al aparato judicial que iría en desmedro del interés general de todos los asociados.*

*Es así como, considero que es contradictorio conceder el amparo de pobreza, pero negarle la designación del profesional del derecho que*

*represente al peticionario, en tanto que esa es la razón de ser de esta figura, pues la exoneración del pago de cauciones, costas, expensas, honorarios de auxiliares de la justicia, en un aspecto consecuencial de aquel, más no la petición principal, como pareció entenderlo la mayoría de la Sala. **De ahí que la solicitud de amparo, no puede estar circunscrita única y exclusivamente a que se le exima de esos gastos, sino que esto último es la consecuencia de habersele nombrado a un abogado que lo represente.***

*Luego entonces, insisto en que decisiones como la presente, abrirá las puertas para que, a futuro quien quiera que se le exonere de costas y gastos en el recurso de casación, **acuda a esta figura jurídica con ese único propósito, y no para que se le designe apoderado, como lo dejó entrever la Sala en la decisión CSJ AL 103-2021.***” (Resalto de la Sala)

Por las razones expuestas, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, en este punto en concreto.

## **2. De la exoneración del pago de las costas y agencias en derecho a la demandante**

NO SE ACCEDERÁ a esta solicitud, teniendo en cuenta que los jueces están sometidos al imperio de la Ley, y en ese sentido, la normatividad aplicable para la liquidación de las costas y agencias en derecho está regulada para este evento, en el Acuerdo No. PSAA16 –10554 de 2016, la cual fue tomada en cuenta por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, según se sustenta en el auto del 16 de septiembre de 2022 (expediente digital 06).

Y con el fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la demandante, al ser revisada las agencias en derecho de primera instancia que asciende a la suma de \$781.242 a cargo de la demandante y a favor de cada una de las entidades Colfondos, Colpensiones y la Nación, considera la Sala que no hay lugar a modificar el valor de las agencias en derecho fijadas toda vez que el Acuerdo No. PSAA16-10554 establece en sus artículos 2º y 5º los criterios y la tarifa dentro de los topes mínimo y máximo en el que se debe mover el juez a la hora de hacer la liquidación de las agencias, para fijar las agencias así:

**“ARTÍCULO 2º. Criterios.** *Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha*



*actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.”*

**“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:**

**1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.**

*En única instancia.*

*a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.*

*b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.*

***En primera instancia.***

*a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:*

*(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*

*(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*

*b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.*

*En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”*

Partiendo de lo anterior y atendiendo a la *naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes*, se trata de un proceso donde:

- Se presentó demanda el 13 de septiembre de 2017 (expediente digital 01)
- En la demanda se solicitó la declaratoria de la ineficacia del traslado del RPM al RAIS; se condenara a la sociedad Colfondos S.A. a trasladar a Colpensiones los aportes y rendimientos, cuotas de administración, sin devolución de mesadas pensionales canceladas hasta la fecha; se condenara a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez con régimen de transición desde el 22 de mayo de 2012; el retroactivo desde esa fecha hasta mayo 2015, fecha en que se reconoció la prestación y desde mayo de 2015 por las diferencias del nuevo valor; se reconociera por parte de Colfondos S.A. los intereses moratorios y subsidiariamente por Colpensiones, o en su defecto la indexación y se impusieran costas procesales a las demandadas.
- En primera instancia, se obtuvo una sentencia desfavorable a los intereses de la parte actora, donde se declaró que el traslado de la demandante a Colfondos SA era válido y eficaz, al no haber ningún

- vicio en el consentimiento al momento de su vinculación y estaba precedida del asesoramiento debido por parte de los asesores; y absolvió a Colpensiones, a Colfondos SA, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público e impuso costas a la parte demandante.
- El 3 de septiembre de 2019 se profirió sentencia de segunda instancia, en donde confirmó la sentencia de primera instancia y se condenó en costas a la parte demandante en la suma de \$100.000 a favor de Colfondos S.A.
  - Y en sentencia SL 2760 de 2022 no casó la sentencia y condenó en costas a la parte demandante.

Razones por las cuales considera la Sala que se ajusta a la justicia y al derecho, sean reconocidos en la suma impuesta en primera instancia, más aún cuando, al aplicar el porcentaje mínimo del 3% determinado en la norma, en los eventos de procesos de mayor cuantía, conforme al auto por medio del cual se concede el recurso de casación, en el que se determinó que el interés jurídico económica asciende aproximadamente a \$158.062.549, valor que al dar aplicación del 3%, generan unas agencias en derecho de **\$4.741.876**, suma que al ser dividida entre Colpensiones, a Colfondos SA, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondería a **\$1.580.625 para cada una de estas entidades**, pero como se puede ver en el auto de liquidación de costas y agencias en derecho, se determinó que la demandante debía pagar a cada una de ellas **la suma de \$781.242, es decir, un valor inferior**.

En igual forma, deberá decirse que no hay lugar a exonerar del pago de las costas procesales impuestas en la sentencia SL 2760 de 2022 por parte de la Corte Suprema de Justicia, debido a que se trata del órgano de cierre y superior funcional, frente al cual, esta Sala no tiene la facultad para modificar las decisiones por él adoptadas, siendo lo correspondiente acatar las órdenes por él impartidas.

### **3. De la solicitud de modificación de las costas procesales y agencias en derecho liquidadas y aprobadas, por error en el valor indicado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 2760 de 2022**

Se tiene que la sentencia SL 2760 de 200 determinó:

*“Las costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente demandante y a favor de Colpensiones y La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un 50% a cada una de ellas. Se fijan*

*como agencias en derecho **la suma única de \$4.700.000, cifra que se distribuirá en partes iguales** entre las opositoras y se incluirá en la liquidación que se practique conforme a lo preceptuado en el artículo 366 del Código General del Proceso.” (Resalto de la Sala)*

En auto del 7 de septiembre de 2022 se liquidaron costas y agencias en derecho en el siguiente tenor:

**“A cargo de MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA y a favor de COLFONDOS**

Agencias en derecho primera instancia .....	\$ 781.242
Agencias en derecho segunda instancia .....	\$ 100.000
Agencias en derecho Casación .....	\$ -0-
Gastos acreditados en el proceso.....	\$ -0-
TOTAL, LIQUIDACIÓN DE COSTAS.....	<b>\$ 881.242</b>

**A cargo de MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA y a favor de COLPENSIONES**

Agencias en derecho primera instancia .....	\$ 781.242
Agencias en derecho segunda instancia .....	\$ -0-
Agencias en derecho Casación .....	\$ 4.700.000
Gastos acreditados en el proceso.....	\$ -0-
TOTAL, LIQUIDACIÓN DE COSTAS.....	<b>\$ 5.481.242</b>

**A cargo de MARTHA NUBY TOBÓN HERRERA y a favor de la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Agencias en derecho primera instancia .....	\$ 781.242
Agencias en derecho segunda instancia .....	\$ -0-
Agencias en derecho Casación .....	\$ 4.700.000
Gastos acreditados en el proceso.....	\$ -0-
TOTAL, LIQUIDACIÓN DE COSTAS.....	<b>\$ 5.481.242”</b>

De lo anterior, se colige la existencia de la indebida aplicación de la orden dada en la sentencia emitida en casación por la Corte Suprema de Justicia, bajo el entendido que las costas procesales en dicha instancia ascendieron a la **suma única de \$4.700.000**, debiendo ser este valor distribuido en un 50% a favor de Colpensiones y el 50% restante a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Siendo así las cosas, las agencias en derecho de casación a favor de Colpensiones sería de \$2.350.000 y las agencias en derecho de casación a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público sería de \$2.350.000 y no como se indicó en primera instancia, en la suma de \$4.700.000 a favor de cada una de ellas.

Por lo tanto, se MODIFICARÁ el auto emitido el 7 de septiembre de 2022, para en su lugar fijar:

- Como agencias en derecho de casación a favor de Colpensiones la suma de \$2.350.000 y
- Como agencias en derecho de casación a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de \$2.350.000

Sin costas en esta instancia.

### **EL FALLO DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, RESUELVE:

**PRIMERO: MODIFICAR** la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar fijar:

- Como agencias en derecho de casación a favor de Colpensiones la suma de \$2.350.000 y
- Como agencias en derecho de casación a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de \$2.350.000.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás el auto apelado.

**TERCERO:** Sin costas en esta instancia.

**CUARTO:** La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

Los Magistrados,

  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-015-2017-0761-02  
Radicado Interno 272-22



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 218 del 02 de  
diciembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>